

Capítulo 21

Greg Ruiters

LA RESPUESTA DE CIUDAD DEL CABO A LA CRISIS DE LA COVID-19

Este capítulo ofrece un análisis crítico de las respuestas de las autoridades y los movimientos sociales de Ciudad del Cabo a la pandemia de covid-19. Los principales focos del virus se encuentran en las densas zonas de asentamientos informales, con surtidores colectivos poco fiables. La ciudad proporciona servicios adicionales de agua de emergencia, pero esta ayuda se retirará una vez que el virus remita, siendo la principal preocupación de la ciudad el mantenimiento de su base de ingresos fiscales. Es probable que el desempleo masivo en una economía vulnerable y dependiente del turismo profundice la desigualdad, alimente las ya crecientes protestas sobre el acceso deficiente a los servicios esenciales y desencadene más invasiones de tierras. La resistencia social organizada requiere vincular a los trabajadores que prestan servicios públicos con los comités populares y los desempleados, para trabajar hacia una economía solidaria.

INTRODUCCIÓN

A principios de julio de 2020 se hizo viral un vídeo en el que un hombre desnudo, Bulelani Qolani, era retirado de su casa por la fuerza por la Unidad de Lucha contra la Invasión de Tierras de Ciudad del

Cabo. Cuando se le preguntó por qué el ayuntamiento de la Ciudad del Cabo (CCT) estaba desalojando a personas a pesar de la moratoria de desahucios durante la pandemia de covid-19, el alcalde Dan Plato repitió su respuesta habitual: “No se trata de desalojos, sino de operaciones contra las invasiones de tierras”.

La crisis de la vivienda en Ciudad del Cabo ha sido “inventada”, en el sentido de que una gran cantidad de casas infrautilizadas y con todos los servicios en zonas de baja densidad y bien situadas (con población mayoritariamente de raza blanca) han sido construidas como activos especulativos. Mientras tanto, la mayoría de los ciudadanos pobres se hacinan en asentamientos de viviendas informales y municipios de la periferia. Muchos se han visto obligados a “invadir” terrenos no utilizados para construir viviendas.

Considerada la ciudad más rica de África, Ciudad del Cabo se encuentra también entre las más desiguales, racistas y desigualmente desarrolladas del mundo (McDonald 2008, Lemanski 2007, Turok 2001, Banco Mundial 2018). Bajo los gobiernos de centro-izquierda del Congreso Nacional Africano (ANC) y de la Alianza Democrática (DA), se ha convertido en una ciudad neoliberal paradigmática.

Este capítulo utiliza el agua como lente para observar cómo las desigualdades raciales y espaciales de Ciudad del Cabo revelan el carácter incompleto de la revolución social que el ANC había prometido a Sudáfrica, argumentando que la crisis de la covid-19 y las respuestas a la misma se entienden mejor si se observan las prioridades de la élite gobernante y las fallas de la economía a escala territorial.

CIUDAD DEL CABO COMO EPICENTRO DE LA PANDEMIA

Ciudad del Cabo fue la primera urbe africana en convertirse en un epicentro de la pandemia, con el 60% de los casos registrados en Sudáfrica entre marzo y junio de 2020. El virus fue introducido por turistas extranjeros y pronto se extendió a la población trabajadora local y luego a los distritos de población negra, donde (en los peo-

res casos) 1 de cada 50 personas fue infectada. Según el Dr. Ayanda Trevor Mnguni, jefe de medicina interna del hospital del distrito de Khayelitsha, a mediados del año el virus ya “se propagaba como un reguero de pólvora” (BBC 2020).

El sistema sanitario sudafricano sigue dividido entre un sistema privado de primera clase, para una minoría que puede permitirse un seguro privado, y un sistema público sobrecargado utilizado por la población mayoritariamente negra. Estas desigualdades han sido nefastas durante la pandemia. El proveedor de servicios sanitarios privados Netcare ha calculado que más de la mitad de las 6.000 camas de cuidados intensivos del país se encuentran en hospitales privados.

Para agravar la crisis, Sudáfrica también registra la mayor epidemia de VIH del mundo, lo que hace que la población sea más susceptible a la covid-19 y otras infecciones. Según las cifras de 2019, solo dos tercios de los 7,7 millones de personas que se estima que viven con el VIH en el país reciben tratamiento antirretroviral.

Con un número de casos de covid-19 en Sudáfrica cercano a los 500.000 a finales de julio de 2020 –más de la mitad del total del continente africano y el séptimo con más casos del mundo– las crueles desigualdades del país actúan como un gran acelerador de la pandemia y de las muertes. En julio de 2020, la tasa de infección de Sudáfrica ya era de 2.100 por millón de habitantes (comparada, por ejemplo, con la de China, de 60 por millón de habitantes). De manera reveladora, el gobierno del ANC se ha negado a proporcionar un desglose de casos y muertes por raza.

La crisis sanitaria se ve agravada por una crisis económica. Antes de la pandemia, más del 30% de los sudafricanos estaban desempleados. Dos semanas después del cierre, una encuesta del Consejo de Investigación en Ciencias Humanas reveló que más de la mitad (55%) de los residentes de los asentamientos informales no tenía dinero para comprar alimentos y lo mismo ocurría con dos tercios de los residentes de los *townships*, los asentamientos irregulares urbanos (News24 2020).

LA RESPUESTA NACIONAL

El 15 de marzo de 2020, el Departamento de Gobernanza Cooperativa y Asuntos Tradicionales declaró la catástrofe nacional recurriendo a la Ley de Gestión de Catástrofes (2002), con la imposición de uno de los confinamientos más estrictos del mundo. Se ordenó a los municipios que cerraran todas las instalaciones públicas que no prestaran servicios esenciales. Se prohibieron las reuniones comunitarias, las bodas y otras celebraciones. Se permitió continuar con los funerales, pero los dolientes se limitaron a familiares cercanos y a un máximo de 50 personas. El Estado suspendió la concesión de permisos para marchas, protestas y entrega de peticiones. Todas las personas quedaron confinadas en su lugar de residencia, a menos que fuera imprescindible salir para realizar trámites esenciales, obtener bienes o servicios de primera necesidad, cobrar subsidios sociales o pensiones, o buscar atención médica. Se prohibió la circulación entre provincias y entre áreas metropolitanas y distritales, excepto para los trabajadores esenciales, el transporte de carga y restos mortales, o para asistir a funerales.

El gobierno adoptó un enfoque especialmente severo para hacer cumplir las medidas. La policía nacional (SAPS) y el ejército sudafricano (SADF) utilizaron medidas brutales para imponer el cierre. Hubo muchas denuncias de personas agredidas y asesinadas por la SAPS. A finales de marzo, pocos días después del inicio oficial de la pandemia, la Dirección Independiente de Investigación Policial ya había registrado 14 agresiones, una violación y ocho muertes como resultado de operaciones de la SAPS.

Las ONG y varios partidos políticos de la corriente dominante también expresaron su preocupación ante el rigor y el alcance del confinamiento, al entender que este tipo de medidas no tenía sentido para muchos segmentos de la población, en particular quienes residen en asentamientos informales y con una alta densidad habitacional, ya que el confinamiento afectaría gravemente los me-

dios de subsistencia de muchísimas personas. Por ejemplo, muchos trabajadores del sector informal, como los recicladores y los comerciantes ambulantes, perdieron su principal fuente de ingresos cuando se prohibieron sus actividades y se cerraron los mercados.

El gobierno anunció dos medidas de transferencia de efectivo en un intento de evitar el colapso total. En primer lugar, en abril de 2020, el Estado anunció que los desempleados recibirían un subsidio de 350 rands al mes desde mayo hasta finales de octubre.¹ El subsidio sólo cubriría a solicitantes que no fueran beneficiarios de ninguna otra forma de subvención de la Seguridad Social o del Fondo del Seguro de Desempleo, y que no tuvieran otras fuentes de ingresos. En segundo lugar, el gobierno aumentó los subsidios sociales de 350 a 500 rands mensuales. Alrededor del 42% de los hogares sudafricanos dependen de los subsidios sociales; es la fuente de ingresos más importante después de los salarios (*Eyewitness News* 2019).

LA RESPUESTA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL CABO

En marzo de 2020, el CCT anunció medidas en cumplimiento de las directivas nacionales. Durante los primeros meses de la pandemia la municipalidad operó con personal esquelético, respondiendo únicamente a las emergencias más graves. El suministro de equipos de protección personal (EPP) fue extremadamente tardío. Como dijo un trabajador durante la reunión del 4 de junio del Comité de Cartera de Agua y Aguas Residuales, “la provisión de EPP ha mejorado desde el inicio del confinamiento, pero ha habido problemas con el suministro... Actualmente, recibimos solo una mascarilla de tela por persona” (City of Cape Town 2020b).

Una vez que se expandieron los “puntos de mayor contagio”, los trabajadores sanitarios contratados fueron de puerta a puerta, haciendo preguntas a los residentes sobre síntomas de la covid-19. Si

¹ 1 US\$ = 16 ZAR

los residentes respondían afirmativamente a determinadas preguntas se les sometía a las pruebas de covid 19, ya sea en una clínica o en uno de los emplazamientos móviles dispersos por toda la ciudad (City of Cape Town 2020a). Se identificaron entre 30 y 40 emplazamientos públicos para la cuarentena y el establecimiento de instalaciones de aislamiento, pero en septiembre de 2020 la ciudad todavía estaba esperando a que se liberara la financiación para este fin.

También han surgido problemas de toma de decisiones autocráticas en el contexto de la emergencia. A finales de marzo, los concejales acordaron entrar en receso, dando al alcalde poder ejecutivo. Craig Kesson, el Director de Servicios Corporativos, fue designado para dirigir la respuesta contra la covid-19. Según Kesson, el receso “no significa que los concejales no hayan estado activos, ya que están trabajando sobre el terreno y realizando labores humanitarias”. Además, subrayó, “el alcalde está trabajando para mantener a flote el sector turístico” (Grupo de Seguimiento Parlamentario 2020a).

Servicios municipales

El CCT suplicó a sus residentes: “Seguimos instando a los titulares de las cuentas a que paguen los servicios para garantizar que el ayuntamiento siga funcionando para prestar los servicios básicos; tenemos disponible ayudas para indigentes para cubrir tasas y servicios, pero actualmente se están estudiando todas las opciones. Nuestro centro de atención telefónica sigue abierto”.

En cuanto a los servicios municipales básicos, el 25 de marzo de 2020 el CCT suspendió los cortes de agua a los deudores, pero siguió deduciendo los atrasos de la factura de electricidad; una forma de penalización colateral, ya que en Sudáfrica es ilegal interrumpir completamente el suministro de agua. En abril, el ayuntamiento anunció que los propietarios de locales comerciales podrían solicitar acuerdos para pagar las facturas atrasadas en un número de meses acordado. No se cobrarían intereses y se tomarían medidas de gestión de la deuda mientras durara el acuerdo. También se ofrecieron acuerdos especiales para los hogares, los pensionistas y los

propietarios discapacitados que sufrieran una reducción de sus ingresos como consecuencia de la covid-19, con descuentos adicionales. El CCT también hizo reembolsos y pagos temporales a los desempleados. Para que un mayor número de residentes pudiera beneficiarse de los servicios gratuitos, el umbral de indigencia se elevó a 7.000 rands de ingresos al mes y se aumentó el descuento de las facturas para muchos residentes en este segmento.

La ciudad también ha habilitado un proceso de inscripción más rápido para otorgar rebajas a indigentes, discapacitados y pensionistas. En lugar del periodo normal de evaluación de tres meses, ahora se evaluaría a los solicitantes en función de un solo mes de ingresos.

Prioridades presupuestarias

El 27 de mayo de 2020, el Ayuntamiento de Ciudad del Cabo aprobó su presupuesto para el período 2020-21, que asciende a 54.000 millones de rands. Aunque se incluyeron algunas provisiones para los pobres, ciertas opciones presupuestarias reflejan la política espacial tóxica de la administración de la Alianza Democrática. En el contexto de la pandemia, 12 millones de rands destinados inicialmente a iniciativas de desarrollo comunitario fueron reasignados a la ayuda alimentaria de emergencia. Esta cantidad, que representa sólo el 0,002% del presupuesto, no es ni de lejos la cantidad necesaria en el contexto de la pandemia. Tampoco responde a la naturaleza estructural y sistémica de la inseguridad alimentaria, que va más allá de la cuestión del hambre (Crush et al. 2018). Es revelador que en el mismo presupuesto, el CCT asignó más dinero para las luces de Navidad en las zonas turísticas más ricas (en su mayoría e población blanca) de la ciudad. En el mismo sentido, durante los primeros meses de la pandemia, el CCT no dejó de limpiar las algas de las playas, a pesar de que el turismo se detuvo y las playas se cerraron al público.

A pesar de la evidente importancia de los servicios de agua para promover la salud pública, el ayuntamiento decidió aumentar la ta-

rifa de agua un 4% adicional incluso en el contexto de la pandemia. El agua en Ciudad del Cabo ya era extremadamente cara. Bajo el esquema de tarifas por bloques, el precio del agua aumenta cuanto más se consume, castigando a los residentes de ingresos bajos y medios, con hogares grandes y que consumen más del suministro básico de 6 kilolitros (kL) al mes. En 2018, la factura del agua para un hogar de renta media-baja que consume unos 25 kL al mes era de 800 rands. Aunque estos sistemas de subvención cruzada pueden ser progresistas, en Ciudad del Cabo la ciudad “roba” a los hogares grandes no tan pobres para subvencionar a los ultrapobres, y en el proceso recauda masivamente en el cobro de la facturas del agua (*Daily Maverick* 2019).

La burocracia municipal argumentó que la covid-19 ha agravado una situación financiera ya difícil para la ciudad. La ciudad sufrió grandes pérdidas en los ingresos de los servicios de agua cuando se restringieron los consumidores durante la sequía de 2015-2017. El uso total de agua disminuyó un 45%, pasando de 900 millones de litros diarios (MLD) en febrero de 2017 a 500 MLD en febrero de 2018. Para apuntalar los ingresos en el contexto de la reducción de las ventas de agua, la ciudad aumentó el precio del agua de una media de 18 a 32 rands por kilolitro, un exorbitante 80%. Dado que las tarifas de saneamiento se basan en el volumen de agua utilizado, también se han producido fuertes ajustes en las tarifas de saneamiento.

Asentamientos informales

Aproximadamente el 25% de los habitantes de Ciudad del Cabo viven en chabolas, zonas semipermanentes que reciben “servicios de emergencia” (surtidores colectivos, aseos compartidos, etc.) y que sufren la constante amenaza de incendios, inundaciones y delincuencia. Como señala Overy (2013: 25) sobre la inversión en estas zonas, “en el ayuntamiento y entre el personal municipal existe una percepción generalizada de que los asentamientos informales son temporales y, por tanto, no merecen una inversión a largo plazo ni una alta prioridad, ni en términos de planificación ni de recursos”.

Los funcionarios municipales han advertido en repetidas ocasiones que los asentamientos informales están situados en terrenos ilegales en zonas ambientalmente peligrosas y, por tanto, se consideran inadecuados para la prestación de servicios más allá de los de emergencia (*News24* 2016, Limberg 2019). Pero dado que estas zonas de asentamientos informales –con más de 200.000 hogares– son las que corren mayor riesgo de contraer la covid-19, la ciudad no tuvo más remedio que aumentar la prestación de servicios durante la pandemia. Como medida de emergencia, el CCT anunció que enviaría 28 camiones de agua a comunidades en asentamientos informales que carecen de acceso al agua.

En una reunión del 6 de agosto de 2020, el Comité de Agua y Saneamiento de la municipalidad resumió su respuesta a la covid-19 de la siguiente manera (City of Cape Town 2020c):

- 307 tanques de agua adicionales (de 2.700 litros) instalados en zonas desatendidas y abastecidos diariamente por camiones cisterna.
- Más de 50 millones de litros suministrados, lo que incluye también el suministro directo a través de camiones cisterna en algunas zonas.
- Entrega de baños químicos.
- Aumento de los servicios de limpieza

Ha habido otros intentos de abordar la crisis de vivienda y servicios conexos que agravada en el contexto de la pandemia. En la zona de Endlovini, en el municipio de Khayelitsha, viven unas 20.000 personas que comparten 380 aseos comunitarios (unas 53 personas por aseo). En algunos casos, la gente tiene que caminar hasta 200 metros para llegar a un retrete. Como enfoque para reducir la densificación, la ciudad ha confirmado su compromiso de construir 6.500 nuevas viviendas con un coste estimado de 500 millones de rands (Parliamentary Monitoring Group 2020a). En abril, el ayuntamiento reestructuró el destino de los fondos, como parte

de su plan de mitigación de covid-19, prometiendo (*Daily Maverick* 2020b):

- Invertir 63 millones de rands en el suministro de agua en los asentamientos informales.
- Instalar 93 tanques de agua en asentamientos informales.
- Destinar 122 millones de rands para mejorar la limpieza de los albergues para indigentes y de los asentamientos informales, incluyendo la limpieza a fondo de las zonas comunes, que se llevará a cabo cinco veces a la semana por personal municipal y contratistas.

LA RESPUESTA POPULAR Y DE IZQUIERDA

Los principales actores de la sociedad civil durante la crisis de la covid-19 han sido la Federación Sudafricana de Sindicatos (SAFTU), la Coalición Popular C19 - Grito de los Excluidos. Los dilemas fundamentales en Sudáfrica están relacionados con la incapacidad de establecer vínculos organizativos y conectar los movimientos en torno a un programa más amplio. Muchos sudafricanos negros siguen esperando que el ANC saque al país del marasmo, mientras que la clase media negra económicamente estable (profesores, profesionales de la medicina y policías que acceden a la cobertura médica privada) ha abandonado en gran medida los *townships* negros y se ha “blanqueado”. De acuerdo con un comunicado de la SAFTU:

A las élites políticas y a la clase dirigente no les importamos. Es más probable que ellos sobrevivan aunque se infecten. Pero miles de personas pobres que tienen todo tipo de problemas de salud subyacentes, como la tuberculosis, el VIH y el SIDA, con sistemas inmunitarios débiles, serán víctimas del coronavirus. Los hijos de las familias de la clase trabajadora negra asisten a escuelas de un mundo completamente diferente, donde los niños se hacinan en aulas superpobladas en las que el distanciamiento físico es tan imposible como en

los hogares superpoblados de los que proceden.

La SAFTU ha amenazado con movilizarse en una huelga general y de brazos caídos en todo el país, ya que la covid-19 se ha convertido en una guerra de clases y de razas.

En el contexto de la pandemia, el apoyo político al gobierno de la Alianza Democrática en Ciudad del Cabo parece debilitarse. El Gatvol CT (un movimiento nacionalista local de población *coloured* (“de color”) ha surgido como un grupo escindido de la Alianza Democrática. El líder de Gatvol señaló: “El Ayuntamiento ha inventado un sistema que sólo atiende a las élites y a los blancos. Y estamos cansados de ello, queremos lo que se nos ha prometido” (IOL 2019).

Los activistas contra la privatización formaron la Coalición contra la Crisis del Agua (WCC), con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Metal (Numsa), el mayor sindicato de África, y SAFTU, para movilizar a los capenses pobres y de clase trabajadora contra el gobierno local y ofrecer solidaridad a los estudiantes. Estas organizaciones han participado activamente en una formación nacional de reciente creación denominada Coalición de Crisis covid-19.

CONCLUSIÓN

La pandemia ha puesto al descubierto tanto la naturaleza “inventada” de los problemas de Ciudad del Cabo como la terrible desigualdad y la profunda segregación socioespacial de la ciudad, resultante de una economía al servicio de una estrecha élite. También ha puesto de manifiesto la codicia y el carácter desechable de las vidas de la población negra, materializados de forma dramática en el altísimo y espantoso número de personas que muere tanto de la enfermedad como de hambre.

El 1 de junio de 2020, las medidas de confinamiento a escala nacional se redujeron al “nivel 3” (de un total de cinco niveles de alerta), pero el país aún estaba lejos de alcanzar el nivel máximo de contagios. La mayoría de los trabajadores industriales y mineros

podrían volver a trabajar; las escuelas reabrirían gradualmente, y un tercio de los estudiantes universitarios podrían volver a realizar actividades esenciales.

A mediados de agosto, el gobierno bajó la alerta al “nivel 2”, alegando que el número de nuevos casos de covid-19 estaba disminuyendo. La SAFTU emitió una advertencia:

A diferencia de lo que ocurría al principio del confinamiento, el gobierno ya no está haciendo un rastreo de contactos ni utilizando a los trabajadores sanitarios de la comunidad para realizar pruebas de contagios a la población a gran escala. Al principio de la crisis teníamos muchas pruebas aleatorias. Esto ya no ocurre.

Es probable que el número de muertos de la covid-19 sea tres veces mayor que la cifra oficial.

Mientras que los profesionales de clase media se instalan en cómodos espacios en sus casas mientras elogian las ventajas del “trabajo en línea y a distancia”, los trabajadores esenciales están muriendo y el capital está utilizando la crisis en su propio beneficio, mediante la reestructuración del trabajo y la normalización de la precariedad. Mientras tanto, el apetito de las autoridades nacionales y de los gobiernos locales –en su mayoría corruptos y liderados por el ANC y la DA– por nuevas oportunidades de negocio ha aumentado. El Servicio de Recaudación de Impuestos de Sudáfrica reveló a principios de septiembre que el 63% de las empresas a las que se les adjudicaron contratos relacionados con el PPE no pagaban sus impuestos, y la mayoría de estas empresas contratadas tenían contactos políticos en el gobierno (*SABC News* 2020). Siempre se puede ganar dinero en una crisis.

El CCT no ha visto la crisis de la covid-19 como un momento para repensar la arquitectura de la ciudad y sus problemas “inventados”. Su principal preocupación es la “continuidad del negocio”, la centralización del poder y la supervivencia financiera de la burocracia

cia estatal. La ciudad está muy preocupada por el aumento de las protestas violentas (con secuestros y saqueos) y por los más de 260 incidentes de supuesta ocupación ilegal de tierras entre abril y julio (*SABC News* 2020).

Es probable que las presiones sobre la clase obrera y los pobres aumenten drásticamente con las condicionalidades de los préstamos del FMI, con recortes drásticos en los servicios públicos a partir del despido de alrededor de 300.000 funcionarios, mientras que se ofrecerán más concesiones a las empresas para deprimir aún más las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores. Es probable que aumenten las “invasiones” de tierras, los disturbios por alimentos y las protestas. La Asociación Sudafricana de Gobiernos Locales (SALGA) ha señalado que, una vez superada la crisis de la covid-19, es probable que se interrumpan servicios como los depósitos de agua debido a la vulnerabilidad financiera de los municipios (SALGA 2020).

Es probable que el desempleo masivo en una economía vulnerable impulsada por el turismo alimente las protestas, ya de por sí perturbadoras. Las ocupaciones de tierras ya se han intensificado. Mientras tanto, es poco probable que los servicios de emergencia adicionales y los paquetes de alimentos que ofrecen un alivio temporal se mantengan después de la pandemia. La principal preocupación de la municipalidad es su base de ingresos, sin ningún interés en el replanteamiento de las estructuras de reproducción social.

En estas condiciones, es crucial recuperar la democracia y la responsabilidad social, repensando cómo institucionalizar nuevas formas de gobernanza espacial en torno a la vivienda, el agua, la producción de alimentos y las relaciones de distribución. Resolver la cuestión de la vivienda y del territorio, ocupar la ciudad, crear comités populares para la distribución de alimentos, trabajar por una economía solidaria y atraer a la masa de desempleados a la resistencia organizada, son algunos de los retos más urgentes a los que se enfrenta una izquierda aún desorganizada en Sudáfrica.

REFERENCES

- BBC. 2020. Coronavirus in South Africa: Deciding who lives and dies in a Cape Town township. 2 de julio. <https://bbc.in/2JOa5AO> (consultado el 20 de octubre de 2020).
- City of Cape Town. 2019. *Our Shared Water Future: Cape Town's Water Strategy*. Cape Town, South Africa: City of Cape Town.
- City of Cape Town. 2020a. Cape Town community COVID-19 screenings top 70 000+ mark. 14 de abril. <https://bit.ly/2U9tbDn> (consultado el 20 de octubre de 2020).
- City of Cape Town. 2020b. Water and Wastewater Portfolio Committee meeting. 4 de junio. <https://bit.ly/3n5pKdj> (consultado el 20 de octubre de 2020).
- City of Cape Town. 2020c. Water and Wastewater Portfolio Committee meeting. 6 de agosto. <https://bit.ly/2JPJnI0> (consultado el 20 de octubre de 2020).
- City of Cape Town. 2020d. SPHS02/07/20 [Item 13] - Informal Settlements Basic Services. 30 de junio. <https://bit.ly/32smZLj> (consultado el 20 de octubre de 2020).
- City of Cape Town. 2020e. SPHS02/07/20 [Item 14] - Informal Settlements - Backyarder Programme. <https://bit.ly/32smZLj> (consultado el 20 de octubre de 2020).
- City of Cape Town. 2020f. Statement By Mayor. 3 April. <https://bit.ly/3p7i-Cil> (accessed October 20, 2020).
- Crush, J., Caesar, M. y Haysom, G. 2018. The state of food security in Cape Town. Hungry Cities Report 12. <https://bit.ly/36f5xLb> (consultado el 20 de octubre de 2020).
- Daily Maverick. 2019. Cape Town's water tariffs are unfair and penalise the poor. 5 de noviembre. <https://bit.ly/2U6v5V9> (consultado el 20 de octubre de 2020).
- Daily Maverick. 2020a. Tracking Covid-19 Lockdown demolitions: City of Cape Town says it has a right to protect its property. 23 de julio. <https://bit.ly/3pdx0Wy> (consultado el 20 de octubre de 2020).

- Daily Maverick. 2020b. City of Cape Town redirects funds to fight Covid-19. 22 de mayo. <https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-05-22-city-of-cape-town-redirects-funds-to-fight-covid-19-2/> (consultado el 20 de octubre de 2020).
- Daily Maverick. 2020c. City of Cape Town offers rates and service relief in revised budget. 27 de mayo. <https://bit.ly/2UdsAQR> (consultado el 20 de octubre de 2020).
- Eyewitness News. 2019. Social grants second-most important source of income in SA – Stats SA. 28 de mayo. <https://bit.ly/35clfXg> (consultado el 20 de octubre de 2020).
- IOL. 2019. We will protest again, we are not afraid - Gatvol Capetonian. 12 de agosto. <https://bit.ly/32qp8XG> (consultado el 20 de octubre de 2020).
- Lemanski, C. 2007. Global cities in the South: Deepening social and spatial polarisation in Cape Town. *Cities* 24(6): 448-461.
- McDonald, D. 2008. *World city syndrome*. Londres: Routledge.
- News24. 2016. Sanitation: Why do things go wrong? 29 de mayo. <https://bit.ly/36glsZV> (consultado el 20 de octubre de 2020).
- News24. 2020. Beyond the numbers: The social impact of Covid-19. June 14. <https://bit.ly/3pcKbGS> (accessed October 20, 2020).
- Overy, N. 2013. The Social Justice Coalition and Access to Basic Sanitation in Informal Settlements in Cape Town Study No. 11. Marzo 2012. <https://bit.ly/3eFkYQT> (consultado el 20 de octubre de 2020).
- Parliamentary Monitoring Group. 2020a. Covid-19: City of Cape Town; eThekwin; City of Joburg response plans. 14 de mayo. <https://bit.ly/2GERLgS> (consultado el 20 de octubre de 2020).
- Parliamentary Monitoring Group. 2020b. Western Cape Provincial Government on its COVID-19 response plans. 23 de junio. <https://bit.ly/3p6K6EO> (consultado el 20 de octubre de 2020).
- SABC News. 2020. COVID-19 Corruption | More than 60% of companies awarded PPE tenders are not tax compliant. <https://www.youtube.com/watch?v=yBLUdUX2Ri8> (consultado el 20 de octubre de 2020).
- SALGA (South African Local Government Association). 2020. Role of Local Government in combatting the spread of Covid19. <https://bit.ly/2GGBq6F> (consultado el 20 de octubre de 2020).

- Turok, I. 2001. Persistent polarisation post-apartheid? Progress towards urban integration in Cape Town. *Urban Studies* 38(13): 2349-2377.
- World Bank. 2018. Cape Town's Residential Property Market: Size, Activity, Performance. Centre for Affordable Housing Finance in Africa. . <https://bit.ly/3pauLmQ> (consultado el 20 de octubre de 2020).